

LA GUERRA COMO SUSTITUCION DE LA POLITICA

Luis Alberto Restrepo*

La estrechez del régimen bipartidista heredado del Frente Nacional y la consiguiente ausencia de alternativas de poder que le den cauce institucional a la protesta social, sigue siendo el desajuste político fundamental del país. Ha profundizado hasta la esquizofrenia el distanciamiento entre el “país político” y el “país nacional”: de una parte, ha permitido el desbordamiento de la inconformidad social en paros cívicos y marchas campesinas, y de otra, ha conducido a la burocratización de los Partidos tradicionales, más preocupados por el control del aparato estatal que por las necesidades y demandas populares. Aunque el distanciamiento entre Estado y clases subordinadas no sea la causa de la lucha armada, tampoco le ha ofrecido alternativas.

El enfrentamiento militar se agudiza pero, a la vez, da muestras de fracaso político. La guerra se convierte así en sustitución de la política. Por ello, ha degenerado en acciones terroristas de izquierda y de derecha, si es que en este terreno son válidas las connotaciones políticas. El “boleto”, el secuestro y el “ajusticiamiento” han sido practicados de tiempo atrás, en distinto grado, por toda la guerrilla colombiana. A estas formas de acción se ha venido a sumar, más recientemente, el terror económico

del ELN. Por su parte, además de la violencia social habitualmente ejercida por amplios sectores de las clases dirigentes en contra de los trabajadores, la represión reviste ahora el carácter de “guerra sucia”. Pero las principales víctimas de la persecución no son las mismas guerrillas, sino sobre todo las organizaciones populares legales y sus activistas, así como los dirigentes democráticos, los periodistas, el pensamiento independiente y la cultura. Es decir, todas las fuerzas sociales y políticas que intentan trascender el cerrado esquema bipartidista legado por el Frente Nacional.

De este modo, la carencia de alternativas políticas desemboca en un remolino ciego de violencias encontradas. Si a esto se añade la violencia de las mafias entre sí y contra la “clase política”, y la que se ejerce en contra de los jefes del narcotráfico por fuerzas aún desconocidas, podemos decir que el país se encuentra en el ojo del torbellino.

Queremos analizar en este artículo los seis principales escenarios en los que se manifiesta hoy la crisis del régimen, así como los esfuerzos por resolverla. Anteponemos algunas consideraciones sobre las raíces históricas de la situación actual, que nos permiten tener en cuenta rasgos fundamentales de nuestra cultura política.

* Filósofo, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

Este gobierno busca la solución política a la crisis en dos escenarios principales: mediante el esquema *gobierno-oposición* y a través de la elección popular de Alcaldes. A ellos se añade ahora el acuerdo para el Reajuste institucional, de destino aún incierto. Por la vía armada se expresa también de dos formas el deterioro del régimen y los intentos desesperados por superarlo: a la ya desgastada confrontación entre organizaciones insurgentes y Fuerzas Armadas, ha venido a superponerse la campaña de intimidación y aniquilación sistemática de diversos sectores democráticos. Las retaliaciones del narcotráfico contra la clase política son un ingrediente adicional a la crisis y hasta cierto punto externo a ella, en la medida en que no representan una amenaza para el “establecimiento”, pero sí sacan a la luz profundas ambigüedades y contradicciones internas de las clases dirigentes, definitivas en el actual proceso de acumulación.

Para comprender mejor la hondura y orientación de la descomposición del régimen político colombiano, es indispensable recordar su origen.

1. LA HERENCIA DEL FRENTE NACIONAL

La violencia (1948-1953) y el Frente Nacional (1958-1974) son el resultado de una larga tradición colombiana, dos de cuyas características vale la pena destacar, porque pesan aún decisivamente sobre nuestra cultura política.

En primer lugar, hasta el acuerdo bipartidista, los dirigentes liberales y conservadores fundaron su monopolio en una singular dialéctica pasional de acervos enfrentamientos y transitorias reconciliaciones nacionales. Desde el siglo 19, nutrían el sentimiento de pertenencia partidaria de las clases subordinadas, alimentando prejuicios y odios mutuos, y lanzando cíclicamente a la población a guerras civiles que concluían luego mediante acuerdos de reconciliación nacional pactados por los mismos dirigentes. Los Partidos eran a la vez el principio de la división y de la unidad nacional, de su aniquilamiento y salvación. Así lograba mantenerse un alineamiento partidario de amplias mayorías, más fundado en pasiones ancestrales que en la capacidad de los Partidos para representar y canalizar las aspiraciones económicas y sociales de las mayorías subordinadas.

El carácter pasional y violento del debate político tenía, en segundo lugar, un núcleo religioso que le confería su peculiar virulencia.

Ante una población en su mayoría rural, la diferencia fundamental entre los Partidos radicaba, por lo menos desde la época de la Regeneración, en su distinta relación con el clero. Los conservadores se reclamaban católicos, mientras los liberales eran considerados como anticlericales, y más tarde como masones o comunistas. Desde el púlpito y la escuela, la institución eclesiástica jugaba un papel determinante en la afiliación partidaria de los colombianos. La violenta pasión política adquirió así una hondura seudo-religiosa de confrontación sectaria entre el Bien y el Mal.

Esta cultura política llegó a su consumación en la Violencia (1948-1953) y en el Frente Nacional (1958-1974). Consumación en el doble sentido: la Violencia fue su más alta expresión e impuso la necesidad de su cancelación definitiva. El Frente Nacional la clausuró con el consabido rito de la reconciliación.

Para el sector más tradicional de las clases dirigentes, el Frente Nacional “civilizó nuestras costumbres políticas”. El pacto bipartidista puso fin, en efecto, a cien años de historia de Colombia: extinguió la dialéctica de guerra y paz entre los dos Partidos, y suprimió su tradicional fundamento clerical. La Iglesia católica perdió así su referente partidario y la política se hizo secular por decreto. Con ello, el acuerdo bipartidista quebró la punta pasional del enfrentamiento entre los colombianos. Nunca más —ni siquiera con el esquema *gobierno-oposición*— será posible revivir su afiliación sectaria a los Partidos tradicionales.

El pacto nacional civilizó las costumbres de los Partidos históricos, sobre todo, porque desde entonces sus dirigentes cierran filas ante la presión creciente de la protesta social y la insurgencia armada, o ante cualquier eventual alternativa política que amenace su monopolio burocrático. Justamente por este motivo, el acuerdo bipartidista no le dió salida institucional a los enfrentamientos que padece el país. Despojados de los pretextos seudo-religiosos de antaño, los defensores extremos del régimen y algunos de sus más radicales adversarios de hoy, son herederos de la misma actitud

dogmática, intransigente y sectaria. Se consideran portadores de la única Salvación ante el Mal que abruma a la nación. Sería mejor decir, pues, que el Frente Nacional no civilizó nuestras costumbres sino que contribuyó a desplazar el eje de la antigua barbarie.

Con el pacto entre liberales y conservadores, la Iglesia perdió el lugar central que había ocupado tradicionalmente en el orden político colombiano. Como catalizadora de las afiliaciones partidarias, había sido su puntal decisivo. Al perder su función, los conflictos sociales quedaron al desnudo, sin que las antiguas pasiones religiosas pudieran desviar de ellos la atención. Hoy presenciamos la fermentación tormentosa de un nuevo orden político que deberá ofrecer una real mediación de todos los sectores sociales en conflicto. La desaparición del protagonismo de la Iglesia católica generó un faltante de legitimidad en los Partidos que perdura hasta hoy, y que ha ido siendo paulatinamente suplido por la coerción militar. El régimen actual descansa cada vez más sobre la fuerza.

Ante los actuales esfuerzos de la jerarquía eclesiástica por reconstruir el liderazgo perdido, conviene hacer un breve recuento de la evolución política de la Iglesia católica desde el Frente Nacional. A partir de 1958, la Iglesia desplazó la frontera entre el Bien y el Mal: abandonó su filiación exclusiva al Partido conservador y sus drásticas condenas a los liberales, para convertirse en defensora intransigente de las recién creadas "instituciones democráticas" bipartidistas, en contra de la "subversión marxista, totalitaria y atea". Dicho sea de paso, la Conferencia Episcopal colombiana mira desde entonces a través de este prisma casi todas las formas de protesta y lucha social.

Sin embargo, la nueva posición de la Iglesia no obtuvo el mismo eco de antaño y más bien contribuyó a generar divisiones internas en su seno. En efecto, el Frente Nacional, sumado al proceso de urbanización, a la expansión del sistema educativo y a los medios de comunicación, han secularizado en buena medida la actividad política en Colombia. A esto se añade el hecho de que la jerarquía eclesiástica ha tenido

que asumir una posición particularmente incómoda e imprecisa desde el fin nominal del Frente Nacional (1974); a la vez que mantiene su respaldo a las instituciones democráticas, formula una crítica moral cada vez más aguda a las clases dirigentes y a los Partidos. Defiende, así, instituciones sin sujeto. Flota en el vacío político sin referentes determinados. Por todo ello, en lugar de ejercer una influencia decisoria en el acontecer nacional como en otros tiempos, la crisis de identidad partidaria se refleja en su interior. Ha permitido el surgimiento de una progresiva diferenciación política en el clero, lo que genera no pocas tensiones y conflictos. Parte importante de la Iglesia católica colombiana ha abandonado sus tradicionales perspectivas oligárquicas de comprensión de la realidad nacional y ha ido construyendo nuevas visiones a partir de las clases subalternas.

Desde mediados del año pasado, sin embargo, los obispos colombianos —bajo la dirección del Cardenal López Trujillo— buscan recuperar de nuevo un lugar destacado en la vida política nacional. De ser parte intransigente en el conflicto entre el "establecimiento" y la "subversión", han pasado a ofrecerse como mediadores entre ambos campos, lo que los colocaría en el eje del acontecer político. Como contrapartida, el ofrecimiento de la jerarquía encierra una tácita presión en contra de las anunciadas modificaciones al Concordato, que recortarían los privilegios eclesiásticos. El gobierno se ha resistido hasta ahora a la propuesta episcopal mientras, paradójicamente, la jerarquía ha recibido el respaldo entusiasta del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Por la secularización ya anotada y por el desgaste reciente de su credibilidad, no parece posible, sin embargo, que los obispos puedan volver a conquistar una posición similar a la que tuvieron en el pasado. El punto de apoyo del régimen, ya secularizado, se ha desplazado hacia la fuerza, al menos mientras no surjan alternativas reales de poder para las grandes mayorías.

2. EL POST-FRENTE NACIONAL

En 1974 terminó la alternación de liberales y conservadores en la Presidencia. Los siguientes gobernantes, López Michelsen (1974-1978) y Turbay Ayala (1978-1982), no enfrentaron a

fondo la crisis en ciernes. López intentó una primera respuesta a través de la "pequeña Constituyente", pero —prescindiendo de su naufragio en la Corte— se trataba de un proyecto de reforma muy limitado en sus alcances sociales. El paro cívico de septiembre de 1977 fue un índice del desencanto popular y del siguiente agravamiento de la crisis política.

Turbay no creó una fórmula propia de solución: se limitó a sacar las conclusiones del Frente Nacional. El mutuo acuerdo había transformado a los Partidos tradicionales en empresas electoreras y había confiado el conflicto social al Estado de Sitio y la represión militar. Turbay condujo esta dinámica hasta sus últimas consecuencias: ascendió al gobierno en virtud del clientelismo, gobernó con el respaldo de las maquinarias, y enfrentó la inconformidad social y la insurgencia armada mediante el tradicional expediente de la represión. El resultado fue exactamente inverso al esperado: al término de su mandato se fortalecía el M-19, mientras había crecido considerablemente el desprestigio nacional e internacional de las Fuerzas Armadas y del mismo gobierno. Podemos decir que, con Turbay, llegó a su agotamiento la lógica del Frente Nacional: fracasó la guerra como fórmula para enfrentar la crisis política del país.

Betancur y Barco, por su parte, se ven obligados a enfrentar con seriedad el grave deterioro del régimen. Ambos intentan reavivar la dialéctica política, aunque aplican dos esquemas diferentes. Betancur intenta abrir espacios a una oposición ajena al bipartidismo, de contenido radical, que pudiera abrigar incluso a las guerrillas que se acogieran al proceso de paz. Barco no puede retroceder en la búsqueda iniciada, pero intenta la repolitización nacional en el marco más estrecho de los dos Partidos tradicionales, pretendiendo al mismo tiempo darle un contenido social al Partido liberal.

Betancur fracasó porque no acompañó su propósito de reformas sociales, no osó organizar un respaldo propio e independiente, y encalló en la falta de voluntad política de los bandos enfrentados. Su proyecto se estrelló, a derechas e izquierdas, contra la inercia de la conflictiva lógica frentenacionalista. Con el fracaso de Betancur fracasó también, en cierto modo, la paz.

Barco hereda la incertidumbre de las clases dirigentes y la encarna. Se limita a sacar la suma y resta de las experiencias anteriores: mantiene inicialmente las formalidades de la paz, mientras deja prosperar a su lado la guerra sucia; quiere quitarle piso a la insurgencia mediante programas sociales, y pretende en vano reconducir la vasta inconformidad popular a los desgastados cauces de la confrontación liberal-conservadora. Ante la ineficiencia de las instituciones, se ve obligado a recurrir a propuestas y acuerdos de emergencia como el plebiscito y el Reajuste institucional.

Mientras el proceso de paz de Betancur atendía sobre todo a las "causas sujetivas" de la subversión, la "economía social" de Barco pretende atacar sus "causas objetivas" y, de paso, devolverle al Partido liberal un perfil reformista. Es, sin duda, un buen propósito. Pero los dos proyectos "estrella" del gobierno: las reformas agraria y urbana, se han enredado en el Congreso. El Plan Nacional de Rehabilitación y el Plan para la Erradicación de la Pobreza absoluta son un loable esfuerzo redistributivo adelantado a través del gasto público. Pero el intento no se emprendió por el camino más directo y expedito: los impuestos. La reforma tributaria se hizo en favor del capital. Y el gasto social tiene un monto exiguo en relación con otros rubros como el de seguridad —aumentado en un 50% en 1988— o el de energía, por ejemplo.

Con Turbay fracasa la guerra. Con Betancur, parece fracasar la paz. Con Barco se mantiene nominalmente el proceso de paz mientras prospera la guerra informal, pero ambas parecen ir al fracaso. El país no encuentra aún la fuerza política capaz de llevar a cabo serias reformas sociales, negociar la paz y abrir a fondo el espacio democrático.

3. LOS ESCENARIOS DE LA CRISIS EN LA COYUNTURA:

Como lo señalábamos al comienzo, la crisis del régimen se desarrolla hoy en seis escenarios diferentes, tres de ellos políticos y tres armados: el esquema gobierno-oposición, el Acuerdo para el Reajuste institucional y la elección popular de alcaldes, son los escenarios políti-

cos; los armados se expresan en la lucha guerrillera y en la "guerra sucia". A ellos se añade la guerra fugaz del narcotráfico contra los políticos y el gobierno.

1. El esquema gobierno-oposición

Desde el comienzo de su gobierno, Virgilio Barco se había empeñado en implantar el esquema gobierno-oposición como eje primordial de la dialéctica que debería darle cauce a la inconformidad acumulada. A la par con el deseo de revivir la polarización política en torno al eje liberal-conservador, el Presidente Barco pretendía crear una imagen reformista del Partido liberal. El reciente Acuerdo bipartidista para el Reajuste es una confesión forzosa del fracaso del esquema y de la incapacidad del Partido liberal para llevar adelante reformas significativas desde el gobierno y el Congreso. Si el Acuerdo no se rompe, el gobierno seguirá mencionando el esquema del mismo modo que la paz. Con todo, un análisis de la experiencia es útil y lanza alguna luz sobre la crisis de los Partidos tradicionales.

El modelo gobierno-oposición discurría en el cielo del "país político", que se levanta muy por encima de las preocupaciones cotidianas del "país nacional". Sin embargo, su éxito habría significado un avance relevante: la dialéctica de alternativas políticas es vital para todo régimen abierto al cambio. En Colombia, además, habría cancelado el Frente Nacional y debería haber puesto a los Partidos tradicionales ante el dilema de lograr su revitalización, o exponerse a su lenta extinción.

En la práctica, el modelo estimuló una necesaria fiscalización moral del gobierno ejercida por el Partido conservador, pero se mostró incapaz para generar reales alternativas de poder, al menos en el corto plazo. De hecho, se limitó al juego entre los dos Partidos tradicionales que conservan una raíz oligárquica nunca superada y que, por tradición y composición social, carecen de vocación reformista. Además, el núcleo aún vivo del Frente Nacional se opuso a la aplicación consecuente del esquema como torpedeo el proceso de paz, y venía buscando soterradamente la recomposición del régimen bipartidista. Pero la mayor limitación

del modelo se derivó tal vez de la falta de dirección política por parte del mismo Presidente de la República, de la ausencia de Partido de gobierno y de un Partido fuerte de real oposición política.

Sin gobierno, difícilmente puede haber Partido de gobierno. Hasta hace poco, sectores de las clases dirigentes le reprochaban al Presidente su falta de liderazgo. Vale la pena recordar, sin embargo, que Barco fue escogido como candidato justamente por su bajo perfil político. Ante el país no encarnaba la paz, como su predecesor, ni la guerra, como su contendor. Para los barones liberales aparecía como "tierra de nadie", ofrecida al primer ocupante. Su imagen de técnico servía de escudo al oficialismo ante la fiscalía moral del galanismo. Era la perfecta expresión de la incertidumbre de las clases dirigentes.

Elegido Presidente con más votos que los de sus barones electores, Barco tomó distancia de su Partido y se refugió, durante más de un año, en el "Sanedrín" de sus amigos y consejeros privados. Dejó caer de sus puestos públicos a representativas figuras de la clase política liberal, y se rodeó de asesores y ministros "técnicos". Su administración se convirtió más bien, durante los dos primeros años, en una alta gerencia de obras públicas. La dirección política del país pasó a un segundo término. El gobierno enfrentaba, pues, la crisis sin una clara orientación presidencial, por lo menos hasta comienzos de 1988.

Las intervenciones televisadas del Presidente en enero de este año —la inculpación a la Corte Suprema de Justicia, el anuncio del Estatuto para la Defensa de la Democracia y la propuesta de un plebiscito nacional—, marcan un viraje en el estilo de gobierno, todavía no claramente definido. Inicialmente, Barco parecía reivindicar para sí facultades que lo emanciparían más aún del control institucional ejercido por la clase política. Sin embargo, el Acuerdo del Palacio de Nariño para el Reajuste institucional lo pone de nuevo en manos de los directores políticos bipartidistas.

El esquema gobierno-oposición se adelantó además, sin Partido de gobierno. En primer lugar, la maquinaria liberal no ha superado la

crisis a la que llegó tras el gobierno de Turbay. El Partido aparece como un gremio fragmentado por rivalidades personales, más hondas que las diferencias políticas que lo separan del Partido conservador. La pujía por la alcaldía de Bogotá profundizó aún más sus escisiones. En torno a los candidatos reaparecieron las fisuras fundamentales del Partido entre los eventuales precandidatos presidenciales, y detrás de ellos, entre algunos expresidentes. Curiosamente, Lleras se alineó con Turbay tras la figura de Caycedo, dándole así un apoyo a Durán Dussán y al clientelismo turbayista al que tanto había combatido, mientras López dió sinioso respaldo a Ossa y de este modo a Samper y Galán, enfrentándose de nuevo a Lleras, antiguo padrino de Galán. Esta especie de "comedia de las equivocaciones" da buena muestra de la desarticulación del Partido de gobierno. La derrota electoral sufrida en Bogotá pone al Partido de gobierno ante su propia crisis de dirección y orientación. Hasta los expresidentes perdieron autoridad, con excepción de Turbay Ayala, quien supo mantener la oportuna distancia que le concedía su Embajada ante la Santa Sede.

Las cosas han llegado a tal punto que el mismo Partido liberal se ha convertido en oposición. El trato dado por el Presidente a los jefes regionales del Partido condujo a la "clase política" liberal al ejercicio de una oposición de brazos caídos en el Congreso. El ausentismo y el bloqueo de los proyectos del ejecutivo fueron su arma de combate.

Así como no hay Partido de gobierno, tampoco ha existido una oposición fuerte. Aunque en menor escala, el Partido del Orden está igualmente afectado por tendencias erosivas. Crece la distancia entre el pastranismo y el alvarismo. La fugaz veleidad disidente de Mazuera — sobrino carnal y político de Gómez — y la rebeldía de varios connotados dirigentes regionales a las consignas de Pastrana, son manifestación de las fisuras conservadoras, sin hablar del Movimiento Nacional de Gustavo Rodríguez, que en la subasta de puestos públicos sólo se decidió al final, tras muchas vacilaciones, por el "mejor postor". Entre tanto, Betancur pasa su convalecencia política a la sombra de Pastrana, a cuyo hijo respalda en sus aspiraciones.

No es fácil para ninguno de los dos Partidos tradicionales colombianos sobrevivir por fuera de la burocracia y ejercer la oposición. Carecen para ello de experiencia, base social y, sobre todo, voluntad política. El Partido conservador no logró acomodarse a ese papel sino en muy corta medida. Durante los primeros meses, presionó en todas las formas por volver al régimen bipartidista del Frente Nacional, y luego, ante la terca resistencia presidencial, se consagró al ejercicio de una oposición moralizadora. Pero no se presentó como alternativa de poder. Ante la nueva situación creada por el narcotráfico y los ataques de la guerrilla a los oleoductos, a comienzos de 1988, su jefe se mostró dispuesto a acudir en auxilio del ejecutivo en un gesto de patriótico desinterés. Finalmente, después de la firma del Acuerdo del Palacio de Nariño con el jefe del gobierno, por el que se restablece la alianza bipartidista, el Partido Social Conservador parece satisfecho.

La única oposición política al bipartidismo es la que se expresa en el Partido Comunista y hoy en la Unión Patriótica. Pero no logran convertirse en alternativa popular. Desde luego, la estrechez del régimen ha hecho difícil su labor. Para la administración Barco, la Unión Patriótica ha sido un interlocutor de segundo orden. Por otra parte, sus dirigentes y militantes están siendo sistemáticamente aniquilados ante cierta indiferente impotencia del gobierno. Sus 550 muertos hacen dramaticamente patente la estrechez del régimen. Pero las limitaciones no son únicamente impuestas desde fuera. El Partido Comunista y la Unión Patriótica no logran atraer a las mayorías. Por su rigidez, dogmatismo y jerarquización autoritaria, al Partido Comunista no le ha llegado aún su Perestroika. La Unión Patriótica, tutelada por el Partido Comunista y surgida por iniciativa de las FARC, se encuentra en un difícil y contradictorio proceso de integración a la vida democrática que, además, la extrema derecha se esfuerza por bloquear. El país espera todavía una alternativa popular plenamente definida en su perfil democrático.

La crisis de los Partidos se expresa en el Congreso. El escenario de su renovación ha sido hasta ahora el teatro de su decadencia. El Partido liberal adelantó desde allí la "operación tortuga" contra su Presidente, y el Partido

conservador llevó a cabo una oposición más orientada al desquite partidista que a la creación de alternativas para el país. La reforma agraria, esencialmente recortada, alcanzó una aprobación póstuma en la segunda legislatura, gracias a la secreta transacción de sufragios por prebendas a los senadores liberales, y a pesar del fraude en la votación que todo el país pudo contemplar por la televisión. La reforma urbana está aún estancada, a pesar de que ya fue sometida a mutilación definitiva. Estas prácticas ya habituales en el Legislativo constituyen la "subversión desde arriba", más demoledora que la "subversión desde abajo" que toma de aquella sus mejores razones.

Ante la incapacidad de los Partidos y el Congreso para interpretar y canalizar las grandes urgencias nacionales, el Presidente Barco ha recurrido también —como Betancur— a una "institucionalización paralela" del Estado. Proliferan los asesores y las comisiones presidenciales como réplica a la ineficacia de las instituciones. El procedimiento no carece de ambigüedad: estas instituciones de bolsillo parecen testimoniar la buena voluntad del ejecutivo, pero a su vez encarnan y disimulan la falta de voluntad política predominante. Se convierten en "burladero" del gobierno, acosado por la presión de vastos sectores.

Es el caso respecto a los Derechos Humanos: el problema de la guerra sucia y el terrorismo —central para cualquier democracia—, se desvía del Congreso y los Partidos hacia la persona de un asesor. No quiere decir esto que su nombramiento carezca de importancia. El consejero puede cumplir un buen papel si encara los retos fundamentales que impone el desbordamiento del Estado de Derecho, no sólo por las fuerzas insurgentes, sino también por las fuerzas de seguridad del Estado y por sectores importantes de las clases dirigentes, sin cuyo auspicio no es posible la guerra sucia. Pero puede resultar contraproducente si tiende una mampara al problema mediante tareas, buenas en sí, pero superficiales e inocuas. De todos modos, el recurso a un asesor en un tema neurálgico, testimonia la incapacidad de los Partidos para asumir los desafíos esenciales de la democracia.

En este mismo sentido, el Presidente improvisó un último gesto de independencia: a co-

mienzos de 1988 lanzó al país la propuesta de celebración de un plebiscito ordenado a la eventual convocatoria de una Constituyente. Este recurso consumaba la distancia crítica del Presidente frente a las instituciones. Significaba un autogolpe de Estado desde la cúspide del gobierno. Pero tal como fue propuesto: sin compromisos por parte del Ejecutivo en cuanto a la composición y contenido de la eventual Asamblea Constituyente, el plebiscito habría sido un cheque en blanco girado por el pueblo a favor del Presidente. Sin embargo, amplios sectores de opinión se acogieron a la propuesta oficial en un gesto de desesperada esperanza en la magia del recurso al constituyente primario.

La propuesta creó, sin embargo, una oportunidad política para definir el perfil reformista del Partido liberal. Suscitó un curioso apoyo incondicional de numerosas organizaciones populares mientras tropezaba con la oposición de casi todos los ex-presidentes, con excepción de Turbay, y con el rechazo disimulado del Partido Social Conservador. Se abrió así la posibilidad de una alianza entre gobierno y clases subalternas similar a la de 1936, en oposición a las oligarquías. Tal pacto habría podido llenar de contenido la dialéctica gobierno-oposición. Pero lo más conspicuo del bipartidismo asedió a un Presidente inseguro en la conducción política del país. No era este el tipo de liderazgo que las clases dirigentes reclamaban. Y Barco, finalmente, cayó de nuevo en manos de los directorios políticos gracias a la firma del acuerdo del Palacio de Nariño.

2. El Reajuste Institucional

El 19 de febrero el país contempló por televisión la firma del acuerdo del Palacio de Nariño para el Reajuste institucional, por parte del Presidente de la República y del jefe del Partido Social Conservador. Ambos, sentados en la misma mesa, se dirigieron al país para explicar la significación del nuevo pacto. Más allá de las palabras, la imagen mostraba que el esquema gobierno-oposición había terminado y comenzaba de nuevo el cogobierno de los dos Partidos tradicionales. Durante la interinidad política en la que ha entrado el país hasta el mes de octubre, cuando debe concluir la refor-

ma constitucional, el Presidente ha pasado a ser rehén de los directorios políticos liberal y conservador, que tienen ahora la iniciativa.

El Acuerdo del Palacio de Nariño no es el Frente Nacional. En aquel entonces los dos Partidos que signaban el pacto eran justamente las partes en conflicto. Sellaban, entonces, la paz. Ahora los firmantes son una de las partes enfrentadas, y se unen para consolidar su frente de batalla. Desde luego, el Reajuste institucional no será una declaración de guerra porque el régimen tiene un alto déficit de legitimidad que necesita cubrir pudorosamente. Tendrá, además, la presencia vigilante de terceras fuerzas, de cuyo aval requiere. Pero no sería realista esperar una reforma democrática de las maquinarias políticas tradicionales que tienen en sus manos el proceso del Reajuste. Así pues, si la reforma se lleva finalmente a cabo, propondrá medidas de modernización y de orden, con algunas reducidas concesiones democráticas. Modernización que agilice el funcionamiento de los Partidos, del Congreso, de la administración local y regional. Orden que fortalezca la Justicia incorporando en la legislación ordinaria parte de las normas hoy propias del estado de excepción. Y alguna medida democrática que afirme los derechos y garantías de la oposición.

3. La Elección Popular de Alcaldes

La elección de alcaldes es el segundo escenario de la crisis política nacional. Como se sabe, es el único resultado significativo que sobrevive de la "apertura democrática" impulsada por Betancur al inicio de su administración. La importancia que se le ha dado a la reforma es apenas proporcional a la estrechez del régimen vigente y a la mezquindad reformista de las clases dirigentes. Esta magnificación ha generado una expectativa desproporcionada y, de hecho, le ha concedido a la reforma municipal un significado mayor que el que hubiera alcanzado por sí sola. La contienda electoral, más que el esquema gobierno-oposición, ha revitalizado la actividad política.

Lo acontecido en Bogotá y Medellín en torno a las alcaldías es un buen indicio de la crisis de los Partidos tradicionales y de sus intentos por

resolverla. Las divisiones personalistas que los atraviesan condujeron a un complejo juego de alianzas entre fracciones liberales y conservadoras que buscaban, a través del Partido opuesto, tomar venganza del suyo propio. Es posible, sin embargo, que a través de estas rencillas se estén abriendo paso nuevas tendencias ideológicas separadas por el eje de la crisis del régimen: la paz y la apertura hacia una real oposición democrática. Hay una convergencia tácita entre las derechas de ambos Partidos por un lado, y su centro por otro. El alvarismo se encontraría más cómodo a la derecha —unido con el turbayismo y apoyado por la nueva edición del llerismo— que ligado a Pastrana y Betancur, mientras que estos —más el galanismo y el samperismo— podrían confluir en una tendencia de centro. Un realineamiento en este sentido clarificaría la política nacional y le daría mayor sentido a un eventual esquema gobierno-oposición.

La campaña por las alcaldías mostró que la "clase política" es consciente del deterioro de su propia imagen y busca atajos para superarlo, no mediante un replanteamiento ideológico y político de fondo, sino mediante recursos de maquillaje. A la inseguridad que produce el vacío ideológico hay que atribuirle, en buena medida, el abrumador derroche publicitario.

Los principales candidatos no fueron representantes de la "clase política" tradicional. Fueron figuras jóvenes. Juventud se presentó como sinónimo implícito de cambio y modernización. Los Partidos tradicionales buscaron, además, proyectar una "imagen cívica" de sus candidatos, antes que partidista. Lo "cívico" encierra aquí un "problema semántico". Intenta recuperar al Movimiento cívico que ha sacudido al país en los últimos años. Pero, mientras lo cívico es sinónimo de popular para el Movimiento social, para los Partidos está representado por los dirigentes gremiales (FENALCO, SAC) o por los empresarios de poderosos medios de comunicación (Noticiero TV-Hoy, El Colombiano). Estos representan, en efecto, a la sociedad civil, pero sólo a aquella sociedad que se expresa a través de los gremios. No a la que toma parte en los paros cívicos.

La elección de alcaldes barajó las cartas de figuras y fuerzas políticas. Andrés Pastrana,

Caycedo y Ossa ascendieron vertiginosamente en el escalafón de sus Partidos. María Eugenia se convirtió en punto de fuga de las tendencias más disímiles, desde la derecha hasta la izquierda. La Unión Patriótica logró en Bogotá una vasta alianza con variados sectores de izquierda, gracias a la valerosa candidatura neoliberal de Clara López. Pero no se dibuja aún la fuerza política que pueda generar un vasto consenso popular.

Los resultados de las elecciones, apenas conocidos al concluir este artículo, deberán ser objeto de futuros análisis.

4. El enfrentamiento Fuerzas Armadas – Movimiento guerrillero

El esquema gobierno-oposición, la elección de alcaldes y, más recientemente, el proyecto de Reajuste institucional son los escenarios en los que se intenta la superación de la crisis política y la modificación del régimen bipartidista por canales institucionales. El enfrentamiento armado es la materialización misma de la crisis y expresa, a su modo, un esfuerzo desesperado por superarla.

Como es sabido, el fervor guerrillero surgió en América Latina con motivo del triunfo de la revolución cubana. Pero la tradición de sectarismo y violencia política implantada por los Partidos tradicionales, el alto grado de permanente agresión legal y armada de muchos sectores dirigentes sobre las clases subordinadas, y la honda de la crisis social, le han dado su peculiar arraigo en Colombia. Por otra parte, el estrecho régimen bipartidista tampoco le ha ofrecido cauces institucionales alternativos.

Los Partidos tradicionales, instalados en el poder, se habituaron a responder preferencialmente por vía represiva a la protesta social, desconociendo su reto político y reduciéndola a la categoría de problema de "orden público". El recurso casi permanente al Estado de Excepción y su uso represivo contra la protesta así lo demuestran. De este modo, el acuerdo liberal-conservador ha contribuido decisivamente a la militarización del conflicto en Colombia.

Así mismo, el monopolio bipartidista ha dificultado el surgimiento de una oposición polí-

tica que presente alternativas diferentes a la insurgencia armada. El bloqueo a la izquierda política ha fortalecido, indirectamente, al movimiento guerrillero. Aún hoy, si el actual movimiento de protesta no encuentra vías de expresión política, continuará encauzándose progresivamente hacia la lucha insurgente. En este sentido, la "guerra sucia" dirigida por el establecimiento contra la Unión Patriótica y otros movimientos sociales ajenos al bipartidismo, produce resultados contrarios a los que pretende: eliminando alternativas políticas, trabaja en favor de la insurgencia armada. A la vez, el protagonismo ejercido por el movimiento guerrillero durante la administración Turbay, al copar el espacio político de numerosos embriones de izquierda legal contribuyó a su desarticulación final.

Tras veinte años de lucha, la guerrilla revolucionaria en Colombia está lejos de convertirse en alternativa de poder. Su acción militar no pone de manifiesto su proyecto político. En la actual proliferación de violencias, no alcanza a deslindar su propio perfil ante la mayor parte de los colombianos. Su ya larga frustración, la inclina hoy hacia formas desesperadas de acción militar. Se convierte de este modo en un factor, no de maduración en el proceso de constitución de las clases subordinadas, sino de crónica inestabilidad que contribuye a estrechar los márgenes de la organización popular y democrática.

Desde los años sesenta hasta 1974, el movimiento guerrillero estuvo confinado al campo y alcanzó un difícil crecimiento político y militar. En los setenta, el M-19 asumió su personería y le abrió una nueva época. Sus golpes publicitarios y la torpe represión ejercida por la administración Turbay, lo convirtieron en interlocutor forzoso del gobierno. Conquistó simpatía creciente en sectores populares, medios e intelectuales de la población. Como lo demostró después el proceso de paz, obtuvo entonces un protagonismo superior a su capacidad real de conducción política. En consecuencia, durante la administración Betancur, el M-19 perdió la legitimidad conquistada y se lanzó finalmente al suicidio en el Palacio de Justicia. La paz se convirtió en su derrota. Así concluyó el segundo período de la guerrilla colombiana.

La nueva fase del movimiento guerrillero en la que nos encontramos, ha sido capitalizada por el ELN, por haberse mantenido al margen del fracasado proceso de paz. El desarrollo actual se caracteriza por la contradicción entre el crecimiento militar del movimiento guerrillero y su empobrecimiento político. El desacertado manejo del proceso de paz por parte del M-19 desconectó al movimiento armado en su conjunto de buena parte de los intelectuales y de la gaseosa "opinión pública". Incrementó el reclutamiento de su militancia sobre todo en sectores marginales, sin formación intelectual, desesperados por la aguda crisis social. En la medida en que se ahonda la despolitización de sus miembros, se agudiza paralelamente su acción militar. Prolifera la extorsión, el secuestro, el atentado. Para el común de los colombianos resulta difícil distinguir hoy la acción guerrillera de la violencia del narcotráfico o de la delincuencia común.

Las FARC, como el actual gobierno, quedaron suspendidas entre la paz y la guerra. Desde sus inicios, la tregua pactada con ellas fue confusa. Las Fuerzas Armadas mostraron su oposición decidida al acuerdo. El texto fue equívoco. Las FARC continuaron fortaleciendo su equipamiento militar. Tras un prolongado mantenimiento formal de los acuerdos, la voluntad latente de guerra le fue ganando de nuevo terreno a la paz, hasta que hoy la tregua se puede dar por concluida. Del contradictorio proceso, las FARC han heredado un perfil político confuso, aún por definir.

La sorpresiva conformación de la Coordinadora Simón Bolívar, en 1987, no es producto de una concepción compartida por las distintas organizaciones armadas, sino resultado de una "sin salida" política que las coloca ante la necesidad de presionar al gobierno. No es, por lo tanto, un pacto eficaz y duradero. La serie de acciones con las que se ha iniciado el 88, dan indicios de desesperación. El innegable poder militar de la guerrilla sin clara orientación política y el pago de salarios a muchos de sus militantes, augura procesos de descomposición interna.

Por otra parte, el gobierno de Barco parece haber clausurado ya los intentos de paz. Recibió el país bajo la presión de "los enemigos agaza-

pados de la paz", reorganizados a partir del Palacio de Justicia. Desde el comienzo de su administración, la flexibilidad de un complejo proceso político se redujo a un formalismo oficial y se transformó en programa técnico de rehabilitación y normalización. El gobierno se limitó a reiterar sus condiciones sobre desmovilización y desarme sin contraprestaciones. El atentado de las FARC en el Caquetá, a mediados de 1987, endureció aún más la posición oficial. Virtualmente, la tregua ya no existe. La renuncia de Carlos Ossa a su cargo para consagrarse a una intempestiva tarea política, es a la vez la renuncia de Barco a las conversaciones con la guerrilla con el propósito de concentrarse exclusivamente en los programas técnicos de rehabilitación. Con el fin de la paz, se anuncia la guerra. Así lo indica el Estatuto para la Defensa de la Democracia, más severo que el famoso Estatuto de Seguridad de Turbay, y el aumento del presupuesto para las Fuerzas Armadas en un 50%. El renovado auge de la confrontación armada debilita las posibilidades renovadoras de la elección popular de alcaldes y estrecha los márgenes democráticos de la organización popular.

5. La guerra sucia

La "guerra sucia" es el terrorismo del "establecimiento". En Colombia se adelanta hoy el exterminio sistemático de dirigentes populares y democráticos. En las dictaduras militares del Cono Sur y Centroamérica, la guerra sucia ha sido dirigida desde la cúspide del Estado. En nuestro país, se desarrolla hasta ahora al margen del ejecutivo, aunque con una cierta tolerancia del mismo. Como es clásico, aparece mimetizada en el enjambre de violencias cruzadas. Su confusión deliberada por parte de las clases dirigentes es una forma de encubrimiento. Los asesinatos de algunos dirigentes liberales y conservadores, probablemente fruto de retaliaciones por parte de la guerrilla, consuman el estado de confusión. Es ilusorio esperar su esclarecimiento judicial o una decidida acción del gobierno en contra de la eliminación de la oposición. Es necesario remontarse a sus fuentes políticas.

La génesis inmediata de la guerra sucia es clara. Surge del fracaso de la guerra y de la

paz, intentadas durante los gobiernos de Turbay y Betancur. Barco mantiene las formalidades de la paz, pero se ve desbordado por la guerra sucia, auspiciada por quienes se empeñan en recomponer el tranquilo monopolio del Frente Nacional. Ya durante la administración Betancur, la represión comenzó a transformarse en guerra informal. Pero con el gobierno de Barco se ha convertido en el estilo de represión fundamental, impulsado o tolerado por las clases dirigentes, y auspiciado —en algunas regiones— por narcotraficantes amenazados en sus intereses.

Pero la guerra sucia en Colombia ha tenido una larga preparación. Durante los últimos cuarenta años, en el país se ha venido desarrollando un lento "golpe de sociedad civil, regido por el principio de autodefensa. Hasta 1953, las Fuerzas Militares eran el brazo armado del Estado, cuando no simplemente de los Partidos. Hoy la relación se ha invertido: numerosos dirigentes civiles son el brazo político de las Fuerzas Armadas. Ante la defeción de la "clase política" generada por el Frente Nacional, los militares se han convertido casi obligatoriamente en ideólogos de la sociedad civil dominante, al menos en relación con el creciente conflicto social. Y, como es apenas lógico, han impreso en ella su propia perspectiva profesional: una visión de "orden" y "seguridad".

La emancipación de las Fuerzas Armadas frente a la dirección civil del Estado, es resultado de un largo proceso. El autogolpe propiciado por los Partidos tradicionales en cabeza del general Rojas Pinilla, les quitó credibilidad y autoridad ante los militares y nutrió en ellos el sentimiento mesiánico. Luego, el fácil recurso de los distintos gobiernos al Estado de Sitio les transfirió una responsabilidad desproporcionada y una creciente independencia en el manejo del problema político central: el "orden público". Hoy los altos mandos del Ejército conocen mejor al país real que la mayor parte de los dirigentes políticos. Simultáneamente, la formación de los militares ha ido escapando al conocimiento y al control del poder civil. Los oficiales reciben cursos de especialización en el exterior sin que nadie conozca su orientación ni los intereses a los que responden. Las Fuerzas Armadas han creado su propia Universidad, ahondando de este modo la

distancia que ya su profesión genera con relación a la sociedad y propiciando el desarrollo de una perspectiva unilateral sobre el país.

De la independencia frente a los civiles, se ha ido pasando a una creciente tutoría de los militares sobre aquellos en torno a los problemas de "orden público". Han surgido instituciones singulares. Desde hace quince años se viene impartiendo formación castrense a los dirigentes civiles: profesionales, empresarios, políticos, periodistas, sacerdotes, etc., quienes acceden así al grado de oficiales de reserva. Fue ra de ello, las Fuerzas Militares dictan cursos y seminarios frecuentes a estos mismos sectores sobre la situación del país. De modo particular se ha establecido una sólida alianza entre los gremios empresariales y las Fuerzas Armadas. De tiempo atrás se ha venido desarrollando una verdadera industria de vigilancia privada para las clases pudientes, al mando de antiguos oficiales de las Fuerzas Armadas, que cuenta con 40.000 hombres. En los Colegios Militares, hoy numerosos, dirigidos por militares en retiro y en servicio activo, se les da a los estudiantes adiestramiento militar. Más recientemente algunos oficiales procedieron a impulsar grupos de autodefensa campesina, como el país lo comprobó por la Televisión. El Ministro de Gobierno reconoció la existencia de 140 de ellos. Finalmente, en los últimos años las Fuerzas Militares han vendido innumerables armas a los civiles, muchas de ellas de su uso exclusivo.

Todo este proceso de militarización de la sociedad civil dominante obedece al principio de autodefensa. Se ha venido construyendo en Colombia un ejército paralelo no previsto por la Constitución, no sujeto al Presidente de la República, ni a ninguna otra autoridad claramente determinada. Lleva implícito el llamado para que cada uno defienda por las armas su propio interés. Presupone la defeción del Estado y adelanta su disolución. Este "golpe de sociedad civil" es visto con buenos ojos o auspiciado por clases económicamente poderosas, pero incapaces de ofrecerle salidas políticas al país. Son estos sectores, además, sus mayores beneficiarios.

La guerra sucia de hoy no es, por lo tanto, un fenómeno sorpresivo e inesperado. Emerge de

una sociedad que se viene militarizando de tiempo atrás. Puede operar en forma centralizada o autónoma. Es responsabilidad, ante todo, de las clases dominantes y de los Partidos tradicionales que han abdicado de su responsabilidad política y la han delegado, abusivamente, a la coerción militar. No se dirige contra la guerrilla. Es más bien el resultado de la frustración producida por la imposibilidad de exterminarla. Es una guerra de intimidación y exterminio contra el pensamiento independiente, la prensa y la cultura, contra todas las fuerzas que podrían ampliar el estrecho régimen bipartidista y transformar en lucha política el enfrentamiento armado. Esta guerra informal le da hoy los mejores argumentos a la guerrilla y bloquea el camino de la paz, aunque no facilita tampoco la victoria militar del establecimiento.

Hasta la administración Betancur, el reto político del país consistía en construir un nuevo Pacto social entre los sectores enfrentados: guerrilla y Estado, y abrirle ancho cauce político a la oposición. Hoy el problema es diferente. No es posible negociar con una guerrilla que no ha sido militarmente derrotada, si antes no se desmontan los organismos paramilitares y se pone freno a la guerra sucia. Pero este último tipo de violencia no es negociable ya que sus promotores son por definición clandestinos. El nuevo diálogo al que alguna vez será necesario retornar, requiere, pues, como condición previa, un Pacto nacional de renuncia a la violencia como método de lucha política, hoy estéril en Colombia.

6. Narcotráfico y desestabilización

Sin la presión norteamericana, el tráfico de drogas no habría inducido factores de aguda incertidumbre transitoria: la "mafia" hace parte del "establecimiento" y su interés no apunta a destruir el Estado, ni el régimen político. Forma parte, más bien, de sus defensores más extremos: protege a sangre y fuego la acumulación privada frente a la subversión o ante los movimientos populares. Su lucha se dirige exclusivamente a buscar la tácita aceptación del negocio y a eliminar el Tratado de Extradición. Con este propósito, ha neutralizado al poder jurisdiccional y ha subordinado a parte

importante del Legislativo y de la "clase política". Si en su camino se ve enfrentado a la legalidad, multiplica una prepotente violencia y profundiza la descomposición de la sociedad y del Estado. Pero no posee un proyecto de sociedad distinto del actual.

Las clases dirigentes, por su parte, se debaten en una doble aspiración contradictoria: el deseo de acumulación y la necesidad de legitimación. Internamente divididas por estas dos exigencias contrapuestas, han mantenido ante el narcotráfico una deliberada ambigüedad: han incorporado pragmáticamente sus capitales a la economía nacional para garantizar el proceso de acumulación, rasgándose esporádicamente las vestiduras ante ciertos delitos especialmente escandalosos o ante la presión exterior. Este juego ha dado lugar a la singular paradoja según la cual, al sector productivo le va bien, mientras al país le va mal. Pero las clases dirigentes se niegan a reconocer el estrecho vínculo existente entre los dos fenómenos: el narcotráfico.

Los dineros ilegales han sido integrados oficialmente a la economía nacional mediante la amnistía tributaria de 1987, la "ventanilla sinistra" del Banco de la República y el lavado de dólares. Estos recursos han ayudado a la burguesía colombiana a vadear con relativo éxito la difícil situación económica latinoamericana. La inusitada bonanza de constructores, industriales y comerciantes se debe, en medida importante, a tal "exportación no tradicional". Pero de tiempo en tiempo —con ocasión de crímenes notorios llevados a cabo por las mafias, cuando los "capos" pretenden disputarle el control político a los jefes tradicionales o, sobre todo, bajo la presión económica norteamericana— amplios sectores dirigentes expresan su indignado repudio del narcotráfico y emprenden su fugaz persecución. Esta ambivalencia puso al Estado entre la espada y la pared a comienzos del año.

La única contradicción esencial entre el narcotráfico y las clases dirigentes tradicionales —su relación con los Estados Unidos— hizo explosión. Como se sabe, los narcotraficantes reivindican la independencia nacional frente a la justicia norteamericana. En este punto son antinorteamericanos, no por razones políticas

sino por motivos de seguridad personal. La oligarquía colombiana, en cambio, requiere del respaldo de los Estados Unidos para mantener su modelo de desarrollo económico y su control político, sobre todo en las actuales circunstancias del país. Digamos de paso que el gobierno norteamericano persigue la cocaína más por razones comerciales que por motivos éticos ya que, de lo contrario, emprendería una seria lucha contra el consumo de la droga y no simplemente contra su importación. La marihuana, antes condenada, es hoy el segundo producto agrícola de los Estados Unidos.

El "affaire" Ochoa desató las tensiones acumuladas. La presión económica de los Estados Unidos, que sigue pendiente como una espada de Damocles, colocó a la burguesía y al Estado colombianos ante un dilema difícil de resolver: perseguir seriamente a los grandes "capos" de la mafia y verse enfrentados a sus retaliaciones, o mantener vigente la tácita alianza con estos y soportar las sanciones de Norteamérica. Para bloquear todo intento de restablecer la Extradición, los narcotraficantes se mostraron dispuestos a librar una guerra feroz contra el Estado. Sus golpes iniciales se dirigieron, por primera vez, contra la "clase política", la que por fin pareció darse cuenta, repentinamente, de que existe una grave crisis nacional.

El dilema entre acumulación y legitimidad en relación con el narcotráfico, desestabiliza al Estado colombiano con mayor eficacia que la insurrección armada o la protesta social. La respuesta del Estado a la guerra declarada marcará una línea muy importante en este camino. Por ahora ha vuelto una calma incierta basada al parecer en acuerdos desconocidos por el país. De todos modos, los precedentes sentados por los narcotraficantes —sobre todo el asesinato del Procurador—, han dificultado la solución. Los responsables de estos hechos reconquistarán la tolerancia económica pero deberán contar con un hondo repudio social.

Lo más grave de la situación, es el hecho de que las clases dirigentes se empeñan en desconocer su verdadera naturaleza. Acosadas por la necesidad de legitimación ante sí mismas, ante el país y en el exterior, se empeñan en la hipótesis norteamericana de la narcoguerrilla e intentan desviar de este modo la indignación y la

represión contra las organizaciones armadas y los movimientos populares. El Estatuto para la Defensa de la Democracia promulgado a raíz del embate del narcotráfico, muy probablemente será orientado en su aplicación contra estos últimos, a pesar de las declaraciones del gobierno en contrario. Parece claro que las agrupaciones guerrilleras han tenido o tienen relaciones eventuales con los narcotraficantes: intermediación comercial en el Guaviare, contrabando de armas, etc. Pero en principio hay una oposición irreconciliable entre un sector social como el narcotráfico, que defiende por todos los medios sus inmensas fortunas conquistadas a puño, y guerrillas revolucionarias que cuestionan cuando menos la actual distribución de la riqueza. Muchos jefes del narcotráfico son hoy latifundistas y enfrentan las presiones guerrilleras incluso mediante el pago de sicarios. Es obvio, en cambio, que las clases dirigentes han pactado estructuralmente con los recursos económicos de la droga, que no pocos de sus miembros están en el negocio, y que giros importantes de los Partidos, del Estado y de los servicios de Seguridad han sido comprados por sus dineros. El no reconocimiento de esta situación ha embarcado a las clases dirigentes, al menos por ahora, en una política contradictoria, estéril y peligrosa.

4. A MANERA DE BALANCE

Mirando la evolución nacional de conjunto, se aprecia una agudización de las formas de confrontación armada que debilitan las mediaciones civilizadas y políticas. A su vez, el enfrentamiento armado avanza en un proceso de descomposición: se desarrolla ahora en el terreno de la guerra sucia y del terrorismo, y conduce al deterioro de los estrechos márgenes de la democracia colombiana. Hacia allá conspiran hoy, objetivamente, tres fuerzas disímiles o incluso contrapuestas: el movimiento guerrillero, el narcotráfico y la guerra sucia. En estas condiciones se debilita sustancialmente el alcance renovador de la elección popular de alcaldes, al menos en el corto plazo. Aunque se lo mantenga nominalmente, el esquema gobierno-oposición tiende a ser definitivamente suplantado por una edición actualizada del Frente Nacional. Crece el riesgo del recurso a las soluciones de fuerza. Hacia allá apunta el Estatuto

para la Defensa de la Democracia. Si la Comisión de Reajuste institucional se conformara con una auténtica representación de las clases subalternas, si los temas permitieran discutir los problemas sociales y políticos de fondo, si las clases dirigentes comprendieran la gravedad del momento y se mostraran flexibles, si el gobierno ejerciera una conducción adecuada del proceso, —cosas todas más que improbables— el Reajuste podría abrir un cauce decisivo hacia la civilización del conflicto. Pero, por la forma como se realizó el acuerdo, solo pueden esperarse medidas de modernización del Estado, junto con medidas de orden, y alguna concesión a las demandas democráticas de garantías para la oposición.

El país no está, sin embargo, en una fase pre-revolucionaria ni en vísperas de una guerra civil. El cruce de violencias contradictorias no estimula siquiera un proceso claro de organización y enfrentamiento de clases. Sólo genera confusión, aguda fragmentación social, hastío y repudio general. No hay consenso en ningún sector, ni dirigente ni subalterno, sobre los caminos que debe seguir el país, y nadie se atrevería a vaticinar cuáles serían los resultados finales de las diversas alternativas. Tampoco en el estamento militar parece haber claridad sobre una salida golpista. La situación es de virtual anarquía. Avanzan los tambores de la guerra, pero no como continuación de la política, sino como su ruda sustitución desordenada.

Pero la proliferación de violencias nutre el anhelo de orden a cualquier precio. Si se optara explícitamente por la aplicación masiva de la fuerza, la represión podría ser tanto más violenta cuanto menos claros son los resultados previsibles, y no recaería sobre los jefes del tráfico de drogas con quienes las clases dirigentes y el Estado tienen nexos múltiples, ni sobre la guerrilla bien equipada para su defensa, sino sobre el movimiento popular y democrático en su conjunto.

Ante la confrontación cada vez más generalizada, anárquica y sin resultados, se requiere hoy, sin duda, un amplio Movimiento Nacional. Puede tomar dos formas: una, como recomposición actualizada del Frente Nacional, convocado y dirigido desde arriba, desde el Es-

tado y los Partidos, para modernizar el Estado e imponer el ‘‘Orden’’ mediante la represión. Esta parece la tendencia predominante, confirmada por el Acuerdo del Palacio de Nariño. Otra, como Movimiento ciudadano impulsado desde abajo, desde la sociedad y todos sus organismos, abierto desde luego a la libre participación individual de miembros de todos los Partidos, que permita derrotar políticamente las distintas formas de violencia, y presionar al Estado y a los mismos Partidos por las reformas sociales y políticas más urgentes. La primera fórmula, la más fácil, significaría la reiteración y el ahondamiento de la crisis del régimen bipartidista legada por el Frente Nacional. No se ve cómo los Partidos tradicionales, gestores y actores fundamentales de la crisis, puedan ser los impulsores protagónicos de su solución. El país necesita un amplio Movimiento democrático que presione serias reformas económicas, sociales y políticas, y exija a todas las partes en conflicto la reformulación de la paz. Este es el gran desafío del presente. Todo esfuerzo por desconocer o ahogar este fenómeno político —como la guerra sucia— solo puede agudizarlo.